

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA Y DOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ SISTEMA ACUSATORIO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022)

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela impetrada por INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, a través de apoderada judicial, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición.

I. HECHOS

Relató la apoderada que el 27 de marzo de 2019, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, con ocasión de la expropiación administrativa parcial sobre una zona del terreno con matrícula inmobiliaria 50S-40279765, profirió la Resolución No. 1246 del 2019, en la que se ordenó el pago de la suma de \$2.443.648.757 m. l. menos los descuentos legales a que hubiera lugar.

Fue así como, según su dicho, en primera instancia se envió el título judicial a órdenes del Juzgado 12 Civil del Circuito con el fin de dar trámite financiero a una demanda inscrita de Visocol Ltda. contra la Constructora y Promotora BCP Ltda. En Liquidación el día 15 de marzo de 2002 (sic), y se determinó que, si no era cobrado diez días después, la autoridad judicial debería regresarlo a la entidad bancaria. Juzgado 12 Civil que el 13 de enero de 2021 ordenó convertir todo el dinero al Banco Agrario ya que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN no era parte alguna en el proceso.

Seguidamente, señaló que el día 24 de septiembre de 2021, la empresa beneficiaria del título, en sus términos, la parte accionante, se remitió al Banco Agrario con el fin de que realizara el desembolso, el cual le indicó que el título ya se había pagado a un sujeto de nombre Víctor Hugo Jiménez Castro por orden del el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, por lo que ese mismo día se elevó un reclamo ante la entidad accionada bajo el radicado No. 20215261582152, el cual también se reiteró el día 13 de octubre de 2021.

Al respecto, indicó que el día 28 de octubre de 2021, la directora técnica de predios de la entidad accionada dio contestación a la petición presentada, que a su parecer fue absurda, pues se justificó el referido pago con una supuesta acta de conciliación firmada por el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral de la “Fundación Derecho y Equidad”, la cual aparece firmada entre Víctor Hugo Jiménez Castro y Carlos Adner Viveros Díaz, supuesto apoderado de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, por poder otorgado por Miguel Arango de Fex, representante legal de la compañía, quien en realidad no lo hizo ni ningún otro miembro de la sociedad, máxime cuando ni siquiera se conoce a las personas involucradas.

Además, destacó, entre otros aspectos, que se suministró dicha acta de conciliación sin anexo alguno y copia de un memorando en el que María del Pilar Grajales Restrepo, Directora Técnica de Predios del IDU, le ordenó a Diana Patricia Valderrama Alvarado, Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo de la misma entidad, realizar el cheque a nombre de Víctor Hugo Jiménez Castro, por orden de una señora de nombre Dorys Eugenia Álvarez Garzón.

Así las cosas, subrayó que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU omitió suministrarle de manera íntegra a la parte accionante, toda la documentación que debe contener un proceso de expropiación administrativa, pese a que se lo volvió a requerir el pasado 14 de febrero de 2022.

No obstante, puntualizó, entre otros aspectos, que:

*“De todos los documentos que deben reposar en el IDU, no hemos recibido, sino la copia de la resolución, que ya la habíamos encontrado en una página web, la presunta constancia de ejecutoria, la fraudulenta acta de conciliación sin anexos, el memorando en el que una presunta delincuente DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN le solicita a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO que le elaboren un cheque a nombre de VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, unas verificaciones de firmas de poderes que no concuerdan con lo que quieren verificar, esto en la notaría 7ª de Bogotá, con prehistóricos sellos de caucho, sin la biometría exigida, firmas falsas del representante legal de la empresa sobre papel borroso. Sin embargo no se registró ni una sola llamada al representante legal de la empresa INVERSORA Y PROMOTORAGERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, para verificar si el IDU podía entregar los **dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente**, a na presunta red delincuencia.*

(...)

*Tampoco entregó el IDU, los documentos que justifiquen lo qué sucedió con la diferencia del dinero ordenado en la expropiación: **dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones, seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos (\$2.443.648.757) moneda corriente** y el dinero que envió al juzgado 12 C. del Cto., suma de **dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente**, que debía ser entregado a la compañía subjujice; o sea, también hace falta la documentación que justifique en qué se gastaron los **ochenta y dos millones, doscientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos (\$82.265.383) moneda corriente**”.*

Por lo anterior, solicitó que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición de su prohiada y, en consecuencia, se ordene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU que le entregue la totalidad de la documentación que reposa en el expediente de la expropiación administrativa antes descrita, así como que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las mismas actuaciones que den lugar a la violación de sus garantías superiores.

Posteriormente, el 11 de abril de 2022, la apoderada judicial de la accionante allegó un memorial ante este Juzgado, en el que deprecó que *“en manera alguna dé cumplido el hecho causal, el IDU no cumplió con la solicitud presentada”*, puesto que además de que falta documentación, la que ha sido suministrada se encuentra indebidamente organizada de manera cronológica y su foliatura es errada y en lápiz.

Por ello, hizo una relación de la documental que no fue anexada en la entrega, así:

Los escritos describen unos documentos que reciben o entregan, los cuales no fueron anexados a la entrega:			
NUMERO DE FOLIO	CONTENIDO	FECHA	RADICADO
445	DE DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO RECEPCIÓN VIRTUAL ATENCIÓN AL MEMORANDO 91043 TDJ 7922356 RT 46881A ANEXOS NO LOS ENTREGARON	4/04/2021	ORFEO 20215260730852
465- 465 R	MEMORANDO MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO A DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO TESORERA GERONA FALTAN LOS ANEXOS ☐ COPIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2021 REMITIDO POR LA SEÑORA YOLEIMA ARIAS, JEFE DE LA SECCIÓN DE AUTENTICACIONES INFORMA QUE LOS SELLOS Y FIRMAS DEL PODER OTORGADO AL SEÑOR CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, CORRESPONDEN A LA NOTARÍA SOLICITUD AL NOTARIO CUARTO DEL BOGOTÁ MEDIANTE COMUNICACIÓN IDU NO 20225050124571 CON RESPECTO A LA AUTENTICIDAD DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DEL PODER OTORGADO POR EL SEÑOR MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX AL ABOGADO CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE FACULTA AL APODERADO PARA QUE INICIE Y LLEVE A SU CULMINACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO CON EL ACREEDOR EL SEÑOR VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO.	18/02/2021	DTDP 20213250035033
REPITE 460-460R	ORFEO RECURSO DE REPOSICION SIN NO AGREGÓ EL ESCRITO PRESENTADO POR LA ACCIONANTE.	17/11/2021	ORFEO 2021 5261884922
REPITE 473-473R	JEAN CARLO SUESCUN SANABRIA SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO RESPONDE A LA PERSONERÍA NO INCORPORAN FOLIOS QUE EL MEMORIAL DICE ANEXAR 20223250235961 20223250238241	10/02/2022	DTDP 2022325024371
REPITE 480- 480R	SEGUNDO DERECHO DE PETICIÓN SIN PREFIJO 202115261687312 NO ALLEGAN ANEXOS	12/10/2021	
REPITE 481-482	REPITE PRIMER DERECHO DE PETICIÓN NO ALLEGAN ANEXOS PRESENTADOS	24/09/2021	20215261582152,00
528-529R	SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE TUTELA SIN RADICADO		
530-534 R	SOLICITUD DE CONCILIACIÓN RADICADO ORFEO SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE SUBSANACIÓN	28/01/2022	

446 - 446R	DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO A MARCELA ZULUAGA FRANCO SIN RADICADO, ES UN PASQUÍN, SIN RADICADO, SIN FIRMA AYN CORREO QUE LO RESPALDE	27/04/2021	
------------	--	------------	--

Igualmente, resaltó que no se proporcionó la documental completa de tesorería que registre el trámite de entrega del cheque de gerencia a Víctor Hugo Jiménez Castro, esto es, las evidencias de que el IDU haya buscado al representante legal de la parte accionante para verificar el desembolso de la suma en cuestión; así como:

- 4.1.1. No anexaron la grabación en la ampliación de la denuncia, de manera virtual, ante el IDU el día 6 de diciembre de 2021.
- 4.1.2. La documental referida en los numerales 3º y 4º del presente escrito.

4.1.3. NOTA: Por la misma naturaleza de la presente accion, manifestamos muy respetuosamente al juez(a) de amparo que no autorizamos el manejo de nuestros datos personales al IDU.

Finalmente, el 18 de abril de 2022, la parte accionante, vía correo electrónico, remitió a este Juzgado otro memorial ratificando el contenido del memorial anterior, en el que aportó además una extensa documentación aportada por el IDU, sobre la cual hizo la siguiente observación: *“recibimos unas hojas incompletas, indebidamente foliadas y con la evidencia de que algunas piezas fueron presuntamente sustraídas u ocultas (...) el IDU en manera alguna entregó los soportes anexos al acta de conciliación de la audiencia adelantada el 27 de octubre de 2021”*.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

Mediante auto del 6 de abril de 2022, se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y se ordenó enterar al accionado INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU de los hechos narrados por la parte accionante para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción. Trámite que se surtió a través de correo electrónico a las direcciones notificacionesjudiciales@idu.gov.co, maria.grajales@idu.gov.co, correspondencia@idu.gov.co y rosita.barrios@idu.gov.co, a cuyas bandejas de entrada efectivamente llegó la comunicación hecha por este juzgado, tal como lo reportó el servidor de correo electrónico de Outlook.

III. CONTESTACIÓN DEL ACCIONADO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

Mediante escrito allegado a través de correo electrónico, Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, en su calidad de Director Técnico de Gestión Judicial del IDU, se refirió a cada uno de los hechos consignados en el escrito de tutela, manifestaciones más relevantes que se reseñarán a continuación.

Indicó que frente al hecho 1º, que no es cierto, ya que mediante la Resolución No. 1246 del 27 de marzo de 2019, la entidad accionada ordenó la expropiación administrativa de una zona de terreno que hace parte del predio identificado con el registro topográfico 46881ª y el folio de matrícula 50S-40279765, pero no para el pago.

Frente al hecho 2º, adujo que es parcialmente cierto, toda vez que en ese acto administrativo se ordenó el pago como precio indemnizatorio como consecuencia de la expropiación administrativa, el cual se puso a disposición del Juzgado 12 Civil de Circuito de Bogotá, en atención a que se encontraba vigente inscripción de demanda en proceso ordinario registrado en la anotación No. 9 del folio de matrícula inmobiliaria SOS-40279765, de Vivienda Social Colombiana Ltda. radicada mediante oficio No. 661 del 15 de marzo del 2002, inscripción ordenada por esa autoridad judicial.

Respecto del hecho 3º, indicó que es parcialmente cierto sobre el pago que se realizó al señor Víctor Hugo Jiménez Castro, con fundamento en la solicitud realizada mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021, por la abogada Dorys Eugenia Álvarez Garzón, en calidad de apoderada del señor Víctor Hugo Jiménez Castro, quien elevó la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU, solicitando endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre de Jiménez Castro. Y para ello, aquella aportó los siguientes documentos:

“Acta de conciliación que se llevó a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral el día 27 de octubre del 2020, “Fundación de Derecho y Equidad” autorizada mediante Resolución 0167 del 15 de febrero del 2018 por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Acta que fue registrada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo con el código del centro 1455, numero del caso en el centro: 363 de fecha 22 de octubre del 2020. Cuantía indeterminada fecha de resultado el 27 de octubre del 2020, identificador Nacional de SICAAC, caso No. 1468705, Resultado No. 1371667, conciliador el Dr. EDUARDO GRILLO OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 19140588”.

Acta en la que se evidencia que entre las partes convocante, el señor Víctor Hugo Jiménez Castro, y la parte convocada, la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre el valor

total de la indemnización con ocasión a la expropiación administrativa del predio identificado con el RT 46881 A.

Además, aclaró que la solicitud realizada mediante radicado No. 20215261582152 se le dio respuesta mediante el oficio con radicado No. 20213251632541 de fecha 28/10/2021.

Seguidamente, expuso que los hechos 4º y 5º son parcialmente ciertos, pues la petición fue realizada mediante radicado No. 20215261687312 del 12/10/2021, y no del día siguiente, a la cual se dio respuesta mediante el radicado No. 20213251632541 del 28/10/2021, en la que no se justificó el pago, sino que se informó cómo éste se realizó con fundamento en la solicitud realizada mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021 por la doctora Dorys Eugenia Álvarez Garzón en calidad de apoderada del señor Víctor Hugo Jiménez Castro, quien realizó la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU de endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre de aquel.

Por otra parte, puntualizó que el hecho 8º no es cierto, e hizo énfasis en que el Ministerio de Justicia y del Derecho envió al IDU un oficio donde manifestó que *“el Acta que fue registrada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo al código del centro 1455, numero del caso en el centro: 363 de fecha 22 de octubre del 2020. Cuantía indeterminada fecha de resultado el 27 de octubre del 2020, identificador Nacional de SICAAC, caso No. 1468705, Resultado No. 1371667, conciliador el Dr. EDUARDO GRILLO OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 19140588”*.

Y agregó que no le constaba que el señor Miguel Arango De Fex no firmó el poder, puesto que la accionada fue receptora de unos documentos aportados mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021 por la Dorys Eugenia Álvarez Garzón a través de los cuales se demostraba una conciliación debidamente registrada en un centro de conciliación facultada para tal fin. Y señaló que, bajo el principio de la buena fe, los documentos aportados a la entidad por la parte solicitante se presumen de veracidad y autenticidad de su contenido, aunque el IDU en aplicación a la política de la diligencia debida, verificó la autenticidad del poder aportado ante la Notaria que lo autenticó. Incluso, manifestó que quien tenía la carga de confirmar si ese poder era o no auténtico y veraz, era el Centro de Conciliación que fue en donde se llevó a cabo la audiencia de conciliación.

Asimismo, sobre el hecho 7º, señaló que no es cierto, toda vez que junto con la respuesta se adjuntaron los documentos que fueron radicados por Dorys Eugenia Alvarez Garzón en calidad de apoderada de Víctor Hugo Jiménez Castro, así como se le informó a la parte tutelante que si requería otros documentos tenía que solicitarlos al Ministerio de Justicia y del Derecho en calidad de parte del proceso, ya que es en esa entidad en donde se registraron los documentos junto con el acta de conciliación.

Por lo anterior, destacó que el IDU dentro del trámite de adquisición predial realiza los pagos que en derecho correspondan, por lo que la conciliación presentada reunía los requisitos legales, era un documento autentico y hacía tránsito a cosa juzgada.

Sobre el hecho 9º, precisó que no era cierto, ya que la accionante solicitó inicialmente copia de la Resolución de expropiación mediante radicado No. 20225260259902 del 14/02/2022 y no copia del todo el expediente, solicitud a la que se le dio respuesta de fondo mediante radicado No. 20223250599691 del 25/03/2022.

No obstante, alegó que mediante los oficios DTDP 20223250728231 y 20225050729881 del 8 de abril de 2022, se le suministró a la parte accionante la totalidad del expediente.

De otro lado, informó que una de las comunicaciones recibidas por la doctora Diana Cristina Ruíz Ariza, corresponde a la enviada mediante correo electrónico del 31 de enero de 2022 y radicada bajo el No. 20225260215212, la cual fue respondida mediante el oficio No. 20225050242111 del 8 de febrero de 2022; así como puso en conocimiento que la accionante remitió al correo electrónico de una funcionaria del IDU la solicitud calendada del 14 de febrero de 2022, la cual fue radicada en el sistema de archivo y correspondencia ORFEO bajo el No. 20225260652402, y que fue atendida mediante oficio No. 20225050729881.

Además, respecto a los documentos citados por la accionante, indicó que éstos fueron entregados en el marco de la entrevista sostenida con los representantes de Gerona el día 25 de enero de 2022, de lo que se dejó un acta.

Por último, informó que previo análisis de los soportes solicitados a las diferentes áreas del IDU responsables dentro del proceso de adquisición predial, se formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio No. 20225050233601 del 7 de febrero de 2022, la cual cursa en la Fiscalía delegada No. 91 bajo el CUI 110016000050202256528.

Conforme a lo anterior, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU consideró que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, en consideración a que siempre ha contestado sus reiterativos requerimientos.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La acción de tutela fue instituida en el artículo 86 de la Carta Política de 1991, como un instrumento para reclamar la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de la persona, individualmente considerada, como consecuencia de la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares encargados de la prestación de un servicio público, o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, bastando la confrontación de tal acción u omisión con los preceptos constitucionales.

Problema Jurídico

De acuerdo con la situación fáctica planteada, corresponde a este Despacho establecer si en el presente asunto el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, o si en su defecto, a la fecha existe una carencia actual de objeto por hecho superado, en el entendido de que la entidad accionada informó que mediante el oficio 20223250728231 del 8 de abril de 2022, le suministró a la parte accionante la documentación requerida.

Procedencia de la Acción

De conformidad con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente **cuando existan otros medios de defensa judicial para la**

protección de los derechos que se invocan, salvo que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en Sentencia SU 712 de 2013, realizó un recuento de la posición sentada por la corporación respecto del carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en los siguientes términos:

“(…) La naturaleza subsidiaria de la tutela pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una instancia adicional para reabrir debates concluidos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el objetivo central de la tutela consiste en asegurar la protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 precisa que “la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Cuando se hace uso de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable la jurisprudencia ha fijado los criterios de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la intervención, como los referentes para aceptar la procedencia del amparo ante la presencia de otras vías de defensa judicial, cuyo alcance ha sido explicado en los siguientes términos:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

Cuando se debaten asuntos entre la administración pública y los administrados, el legislador instituyó el procedimiento administrativo y la jurisdicción contenciosa administrativa para dirimir las controversias y litigios originados en esta clase de relación, y puso al alcance de aquéllos, diferentes procedimientos y medios de control judicial de las actuaciones administrativas.

No obstante, se hace procedente la intervención del juez constitucional en asuntos administrativos, cuando lo que se pretende es salvaguardar los derechos fundamentales en cabeza del petente. Para el caso objeto de análisis, teniendo en cuenta que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN invocó principalmente el amparo de tutela señalando la afectación de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, de connotación *iusfundamental*, este Despacho entrará a verificar si efectivamente existe o no tal trasgresión.

Del Derecho Fundamental de Petición

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Carta Fundamental, toda persona tiene el derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta solución, y si bien es cierto, la norma que contiene las reglas del derecho de petición, en principio se dirige a entidades públicas, la jurisprudencia ha debatido en este sentido las obligaciones que le asiste a la empresa privada, los cuales se encuentran contenidos en la Ley 1755 de 2015, cuyo texto legal es del siguiente tenor:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. -Subrayado fuera del texto original-

Existe vulneración de este derecho fundamental cuando la persona que ha elevado la solicitud no recibe respuesta dentro del término que para cada tipo de petición establece la ley, o cuando no obstante haberse emitido la respuesta, la misma no cumpla con los requisitos de fondo, claridad, congruencia y precisión de cara a la solicitud, sin que esto último signifique, claro está, que la respuesta implique una aceptación de lo solicitado.

Por otra parte, es imperioso indicar que mediante el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, *Por medio del cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*, se ampliaron algunos términos mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Así, el artículo 5º del citado Decreto dispuso:

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”. -Subrayado fuera del texto original-

Caso Concreto

De conformidad con las pruebas allegadas al expediente y las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela, se tiene que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, a través de apoderada judicial, afirmó que elevó varias solicitudes ante el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, en las que, según su dicho, en términos generales requirió que le suministrara copia de las actuaciones surtidas dentro del proceso de expropiación administrativa adelantado por esa entidad, sobre una zona de terreno que hace parte del predio identificado con el registro topográfico 46881^a y el folio de matrícula 50S-40279765.

Por su parte, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU hizo una detallada mención sobre las múltiples solicitudes presentadas por la parte accionante para acceder a algunas actuaciones surtidas dentro del referido procedimiento administrativo, aunque destacó que a la fecha le había hecho entrega de la totalidad del expediente.

Conocido lo anterior, es pertinente traer a colación el criterio jurisprudencial tendiente a salvaguardar el cumplimiento de los componentes jurídicos y estructurales del derecho de petición, en especial de las características que atañen a su respuesta, ello, de conformidad con lo considerado por la Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2017¹, en los siguientes términos:

“El derecho de petición y sus elementos estructurales

14. El derecho de petición está incorporado en el artículo 23 de la Constitución Colombiana de 1991, como aquel que permite “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Además, la disposición indica que el Legislador es quien puede reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Este derecho ha sido históricamente consagrado en diversos textos normativos y, según lo ha reconocido esta Corporación, es una pieza fundamental en el engranaje de nuestro Estado Social de Derecho. Recientemente la Ley Estatutaria 1755 de 2015 reguló su estructura general y principios. A su vez, está consagrado expresamente en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Derechos del Hombre, en los mismos términos que en el texto constitucional.
(...)

*Según se estableció en las **sentencias C-818 de 2011 y C-951 de 2014**, los referidos elementos del núcleo esencial del derecho de petición pueden describirse de la siguiente manera:*

*(i) La **pronta resolución** constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días*

¹ M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

hábiles. Para este Tribunal es claro que el referido lapso es un límite máximo para la respuesta y que, en todo caso, la petición puede ser solucionada con anterioridad al vencimiento de dicho interregno. Mientras ese plazo no expire el derecho no se verá afectado y no habrá lugar al uso de la acción de tutela.

*(ii) La **respuesta de fondo** hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) **claridad**, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) **precisión**, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) **congruencia**, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) **consecuencia** en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, “de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.*

*Ahora bien, este Tribunal ha aclarado que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado, en tanto, **existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido**. En efecto, la **sentencia C-510 de 2004** indicó que “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la adjudicación de un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de la administración”. Así, **el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal**.*

*(iii) La **notificación de la decisión** atiende a la necesidad de poner al ciudadano en conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que lo contrario, implicaría la desprotección del derecho de petición. La notificación en estos casos, se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, esta Corte ha explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de ésta hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado (...).*

Conforme a la anterior jurisprudencia, a continuación, se abordarán de manera independiente las peticiones presentadas y referidas por la parte accionante, que este Despacho pudo extraer de la extensa documentación obrante en el expediente, y que únicamente tienen relación estrecha con lo referido por la demandante, esto es, la entrega de copias del procedimiento administrativo obrante en el IDU.

Peticiones No. 20215261582152 del 24 de septiembre de 2021 y No. 20215261687312 del 12 de octubre de 2021 que fueron atendidas por el IDU bajo el radicado No. 20213251632541 del 28 de octubre de 2021

Las referidas peticiones fueron formuladas en los siguientes términos:

2 SOLICITUDES RESPETUOSAS:

De la manera mas atenta solicitamos:

- 2.1. Ordenar al BANCO AGRARIO realizar el desembolso de los dineros originados por pago del precio de la indemnización, por la adquisición por expropiación de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1 al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. De conformidad con la orden de la resolución

1246 del 27 de marzo de 2019.

- 2.2. En caso de ser cierto el hecho No. 2.1, se nos vulneró el debido proceso y es un hecho que perjudica de manera patrimonial al Estado y a mi prohijada INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1; hecho que tendría repercusiones gravísimas, tanto disciplinarias como penales. Por lo tanto le rogamos de manera muy comedida, se sirva dar trámite a las mismas, no sin antes solicitar ordenar el pago inmediato a los dineros referidos.

5 SOLICITUDES RESPETUOSAS:

De la manera mas atenta solicitamos:

- 5.1 Ordenar al BANCO AGRARIO realizar el desembolso de los dineros originados por pago del precio de la indemnización, por la adquisición por expropiación de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACION identificada con NIT 830.026.001-1 al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. De conformidad con la orden de la resolución 1246 del 27 de marzo de 2019.
- 5.2 En caso de ser cierto el hecho No. 2.1, se nos entregue evidencia de la orden proferida INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, al Banco Agrario para el pago.
- 5.3 En caso de ser cierto el hecho No. 2.1, se nos vulneró el debido proceso y es un hecho que perjudica de manera patrimonial al Estado y a mi prohijada INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACION identificada con NIT 830.026.001-1; hecho que tendría repercusiones gravísimas, tanto disciplinarias como penales. Por lo tanto le rogamos de manera muy comedida, se sirva dar trámite a las mismas, no sin antes solicitar ordenar el pago inmediato a los dineros referidos.

Como resulta evidente, este Despacho encuentra que no es necesario realizar un mayor análisis sobre las referidas peticiones, considerando que la inconformidad de la parte accionante radica en la presunta omisión por parte del IDU en suministrarle copia del expediente administrativo en cuestión, o de alguna de sus actuaciones, empero que como se ilustró anteriormente, ello ni siquiera fue el objeto de esas solicitudes.

Las peticiones se formularon como una reclamación frente al pago del valor de la indemnización, al parecer, a un tercero sin autorización por parte del IDU, frente a lo cual la entidad, mediante el oficio No. 20213251632541 del 28 de octubre de 2021, le suministró a la accionante el fundamento o las razones de cómo se llevó a cabo dicho pago, sin que hasta esa fecha le haya sido requerida propiamente la entrega de alguna documentación, más allá del “memorando No. 20213250035033 de fecha 18/02/2021

con el cual se realiza la solicitud de entrega del depósito judicial” que la accionante entregó frente al numeral 5.2 de la solicitud.

Reunión del 25 de enero de 2022 celebrada entre INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, en virtud de la cual la parte accionante elevó una solicitud de copia del expediente administrativo

Frente a esta reunión sostenida entre las partes en controversia, se tiene que en la fecha mencionada se suscribió un acta en la que se consignó que la entidad accionada le suministró a la accionante la siguiente documentación:

En este estado de la reunión, se hace entrega de copias simples de los siguientes documentos:	
1.	Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020.
2.	Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021
3.	Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX
4.	Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEIMA ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la notaría

(...)

ANEXOS		
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1	Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020.	1
2	Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021	3
3	Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX	1
4	Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEIMA ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la Notaría.	1
5	Original de la declaración juramentada No 322 de fecha 24 de enero de 2022	1

Igualmente, en la referida acta se consignó la solicitud que elevó la apoderada de la parte accionante, en esta ocasión sí sobre la entrega de la totalidad del expediente, así:

La doctora DIANA RUÍZ ARIZA haciendo uso del derecho de petición, solicita se le haga entrega de la totalidad de la documentación que reposa en el expediente en el que está involucrado la firma Inversora y promotora Gerona S.A en liquidación, así mismo aporta para que haga parte de la presente acta la declaración juramentada No 322 de fecha 24 de enero de 2022, en donde se aclara el punto No	
DESARROLLO	
9, ya que el día de ayer desconocíamos el presunto poder mediante el cual se fundamenta el pago realizado. Así mismo se informa a los asistentes que nos encontramos en el proceso de verificación de los poderes ante las Notarías respectivas y el acta de conciliación ante el Ministerio de Justicia.	
CONCLUSIONES	
1. Se dará trámite a la denuncia interpuesta y se responderá de fondo a la doctora Diana Ruíz Ariza respecto del trámite dado por parte de esta Subdirección General	
2. Se dará traslado a la Dirección Técnica de Predios del Derecho de Petición instaurado por la doctora DIANA RUÍZ ARIZA, donde solicita copia de la totalidad del expediente en donde está involucrado la firma Inversora y promotora Gerona S.A en liquidación.	
3. La presente acta se suscribe en dos (2) ejemplares originales	


Así las cosas, este constitucional debe indicar que dentro del expediente no halló soporte alguno de que la referida solicitud de copias haya sido atendida por el IDU de manera oportuna o por lo menos anterior a la interposición de la acción de tutela, empero la cual manifestó y acreditó debidamente en su contestación dentro de este trámite constitucional, que el pasado 8 de abril de 2022, le suministró copia de la totalidad del expediente administrativo a la parte demandante, a través del radicado No. 20223250728231.

De manera que, conforme a la anterior jurisprudencia, encuentra este Despacho que, frente al primer requisito, esto es, la pronta resolución, el IDU emitió contestación a la petición de la accionante hasta el pasado 8 de abril de los corrientes, esto es, transcurridos más de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud (término para la petición de documentos), de lo cual se puede colegir que no fue oportuna.

No obstante, en cuanto el segundo requisito, esto es, una decisión de fondo, se tiene que con la respuesta emitida por la accionada se resolvió la petición de fondo (se respondió materialmente la petición), clara (inteligible y con argumentos de fácil comprensión), precisa (se atendió directamente a lo solicitado), congruente (la respuesta fue conforme con lo solicitado) y consecuente (con el trámite dentro del cual la solicitud fue presentada), sin que ello signifique la resolución favorable de lo reclamado, tal y como se ha definido en la jurisprudencia constitucional, porque como se anunció, de ningún modo la garantía del derecho tiene tal extensión; lo que ha sido ampliamente reiterado por la Corte Constitucional sin que exista discusión frente al tema, pues lo relevante es que se emita respuesta en los términos indicados.

Lo anterior, en la medida de que le proporcionó a la parte accionante la totalidad de las piezas que hacen parte del expediente administrativo, como así se consignó en el referido oficio en el que se plasmó además el recibido de la interesada:

BOGOTÁ



DTDP
20223250728231
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., abril 08 de 2022

Doctora:
DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA
Representante Legal
INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Correo: telealdia777@gmail.com
Cr. 70C No. 49-93
Bogotá D.C.

Se Recibe con la observación que no se han inspeccionado los cp de 10 folios. Ignoramos si es completo el expediente.
Manuel Castro.
08/04/2022

REF: Solicitud de copias expediente Administrativo.

Cordial Saludo,

La Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en relación con el asunto de la referencia se permite anexar al presente escrito en 534 folios. (oficio a doble cara) copia de la totalidad del expediente administrativo del registro topográfico 46881A, tal y como se relacionan a continuación;

(...)

De igual forma, la citada documentación se enviará de forma digital al correo electrónico aportado telealdia777@gmail.com el cual puede ser consultado en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1NWqrWYfHtM-0kGGDjzMpxo2ntkKhUnl_?usp=sharing

Al respecto, para este Despacho es imperioso precisar que no son admisibles las manifestaciones hechas por la parte accionante mediante los memoriales del 11 y 18 de abril de 2022, respectivamente, en los que enunció o enumeró cada uno de los documentos que, según su dicho, no le fueron entregados por parte del IDU, por cuanto debe recordar que presentó una solicitud genérica de copias de la totalidad del expediente, sin que le haya especificado a la accionada cuáles eran las piezas que puntualmente requería, y mucho menos suministró prueba alguna de que dichas actuaciones sí hicieran parte del expediente, pero que, por ejemplo, por capricho o renuencia el IDU no haya querido suministrárselas.

Aunado a ello, debe puntualizarse que, se escapa del control de este juez constitucional que la totalidad de las copias entregadas no esté foliada de manera correcta, que se haya hecho con lápiz, que no se haya ordenado cronológicamente o que se hayan sustraído u ocultado piezas procesales, porque si de ello advierte irregularidad alguna la parte accionante, será ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá ponerlo en conocimiento dentro de la misma investigación que se adelanta por los hechos que dieron origen al presente trámite de tutela o en su defecto ponerlo en conocimiento ante los entes disciplinarios correspondientes para que adopten las decisiones del caso, como la Personería Distrital y/o Procuraduría General de la Nación.

Por otra parte, frente a la última exigencia (notificación de la respuesta), se tiene que la accionada, en la misma fecha le entregó a la accionante dicha contestación o documentación, cuya recepción, por obvias razones, no se discute, ante los memoriales allegados a este Despacho los días 11 y 18 de abril de 2022, en los que la apoderada judicial manifestó su desacuerdo con la documental proporcionada.

En estos términos, para esta autoridad judicial, en el presente asunto se evidencia que se han superado los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela, pues si bien se presentó una demora injustificada por parte de la entidad accionada para emitir un pronunciamiento, se logró acreditar durante el transcurso del presente trámite, que adelantó las actuaciones pertinentes para poner en conocimiento de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN la respuesta a la petición objeto del presente trámite constitucional, esto es, le suministró las copias requeridas, subsanando de tajo, además cualquier vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

Aunado a lo anterior, debe reiterarse que la parte accionante no precisó, si existe algún o algunos documentos específicos que no le fueron suministrados, y que se encuentran en poder del IDU, y por lo tanto se entiende de con la remisión que hiciera la accionada, ceso la vulneración al núcleo esencial del derecho reclamado como desconocido.

Por ende, en la medida de que el fin de la acción de tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, cuando en el transcurso del trámite constitucional el derecho cuya protección se solicita deja de estar en peligro o cesa su vulneración, el juez de tutela debe abstenerse de emitir la orden de protección solicitada.

Sobre ello, la Honorable Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un hecho superado y autoriza al juez de tutela para negar la protección sobre la base de que cualquier orden que se imparta para ofrecer el amparo requerido, es inocua:

“La carencia actual de objeto por hecho superado se constituye cuando lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a los derechos fundamentales ha cesado. La Corte ha entendido que el reclamo ha sido satisfecho, y, en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al extinguirse su objeto

jurídico resultando inocua cualquier orden judicial. Toda vez que ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío’².

Conforme el criterio jurisprudencial antes expuesto, la carencia de objeto por hecho superado se presenta cuando se supera la vocación protectora que distingue a la acción de tutela como medio de amparo de derechos fundamentales, ello toda vez que la finalidad central a la cual se encuentra comprometida la acción consagrada en el artículo 86 superior, se extingue al momento en que la vulneración o amenaza cesa porque ha ocurrido el evento que configuraba tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo³.

En estos eventos no hay lugar a un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, por cuanto lo pretendido mediante la interposición de la acción constitucional fue satisfecho antes de la emisión de la orden judicial correspondiente.

En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela promovida por INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, a través de apoderada judicial, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, sobre la garantía de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición.

Por secretaría, se procederá a la notificación de este fallo con sujeción a lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5.º del Decreto reglamentario 306 de 1992; en el evento de no ser impugnada la decisión dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 - inciso 1.º - del Decreto 2591 de 1991; la actuación deberá ser remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TREINTA Y DOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela interpuesta por DIANA CRISTINA RUÍZ ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.916.910 y la T. P. No. 280.612 del CSJ, apoderada judicial de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, identificada con el NIT 830.026.001-1, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, frente a sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR este proveído de conformidad con lo señalado en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5.º del Decreto reglamentario 306 de 1992.

TERCERO: Contra la presente decisión procede la impugnación ante el superior jerárquico dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 - inciso 1.º - del Decreto 2591 de 1991. Si no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

² Corte Constitucional, Sentencia T-112 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo.

³ Corte Constitucional, Sentencia T-167 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.


JOHANA MARIBEL ROMERO BEJARANO
JUEZ